

25623

**ORDEN de 2 de septiembre de 1982 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada en el recurso número 528 del año 1981, interpuesto por doña Francisca Martínez Sanz.**

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 528 del año 1981, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada por doña Francisca Martínez Sanz, contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios afectuada a la interesada por el Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad 8 le corresponde como Oficial de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación de la referida Oficial, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala, con fecha 9 de julio de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Francisca Martínez Sanz, contra la denegación tácita de las reclamaciones formuladas ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, anulándose por no ser conformes a derecho los actos impugnados, reconociéndose en su lugar el derecho que asiste a la funcionaria recurrente a que se le abone durante el año mil novecientos setenta y ocho el importe de los trienios devengados como Auxiliar Diplomado a razón de mil doscientas pesetas cada trienio, en vez de a ochocientas pesetas, que por tres trienios arroja la suma total de dieciséis mil ochocientas pesetas incluidas las dos pagas extraordinarias, y en el año mil novecientos setenta y nueve, a razón de mil trescientas treinta y dos pesetas trienio en vez de a ochocientas ochenta y ocho, por tres trienios que tiene, suma la cantidad de dieciocho mil cuarenta y ocho pesetas, ascendiendo la totalidad de la cantidad reclamada como Auxiliar a treinta y cinco mil cuatrocientas cuarenta y ocho pesetas. Y a la misma recurrente por trienios de Oficial, durante el año mil novecientos setenta y ocho el importe de los devengados durante dicho año a razón de mil seiscientas pesetas mensuales, en vez de mil doscientas, cada trienio, que por tres trienios arroja la suma de dieciséis mil ochocientas pesetas, incluidas las dos pagas extraordinarias, y en el año mil novecientos setenta y nueve, a razón de mil setecientos treinta y seis pesetas por trienio mensual, en vez de a mil trescientas treinta y dos, arroja la suma de veinticuatro mil ochocientas sesenta y cuatro, por lo que asciende la totalidad de la cantidad reclamada, tanto de Auxiliar, como de Oficial, a setenta y siete mil ciento doce pesetas. Condenando a la Administración demandada al pago de las cantidades dejadas de percibir durante los indicados años mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos setenta y nueve, diferencias entre lo percibido por este concepto durante los dos años citados y lo que realmente le corresponde; sin expresa condena en costas.

Firme que sea esta sentencia y con testimonio de ella, devuélvase el expediente administrativo al Centro de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmada y rubricada.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de septiembre de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

25624

**RESOLUCION de 20 de agosto de 1982, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Pedro Hernández del Castillo, en nombre y representación de don Alejandro, don Pedro y doña Ana del Castillo y Bravo de Laguna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Telde a rectificar determinados errores padecidos en los asientos del Registro.**

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por don Pedro Hernández del Castillo, en nombre y representación de don Alejandro, don Pedro y doña Ana del Castillo y Bravo de Laguna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Telde a rectificar determinados errores padecidos en los asientos del Registro;

Resultando que en el Registro de la Propiedad de Telde se presentó una instancia fechada el día 15 de diciembre de 1980, suscrita por don Pedro Hernández del Castillo que actuaba en nombre de don Alejandro, don Pedro y doña Ana del Castillo y Bravo de Laguna, en la que se hace constar que con ocasión

de practicarse la inscripción del cuaderno particional de los bienes quedados al fallecimiento de don Fernando del Castillo Westerling, se había padecido un error en los libros del Registro, ya que se inscribieron determinadas fincas por terceras e iguales partes indivisas a favor de los tres nietos del testador, don Fernando, don Alejandro y doña María de la Candelaria del Castillo y del Catillo, cuando de conformidad con el testamento del causante y del cuaderno particional, formalizado este último el 19 de junio de 1901, tales fincas correspondían a los tres nombrados nietos del testador, pero en distinta proporción entre ellos, o sea, tres sextas partes indivisas a don Fernando, dos sextas partes indivisas a don Alejandro, y otra sexta parte indivisa a doña María de la Candelaria; que a dicha instancia se acompañó la escritura de partición de la herencia por fallecimiento de don Fernando del Castillo Westerling, así como copia del acta de notoriedad autorizada por el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, don José Manuel Die Lamana, el día 25 de junio de 1979, la cual incluye en su objeto la constatación por evidencia del error padecido; que, en consecuencia, se solicita del Registrador de la Propiedad la subsanación del error señalado;

Resultando que presentada la anterior instancia en el Registro de la Propiedad de Telde, fue calificada con la siguiente nota: «Denegada la práctica de las inscripciones que se solicitan en la precedente instancia —que ha sido presentada en unión del título particional y del acta autorizada el día 25 de junio último por el Notario de Las Palmas, don José Manuel Die Lamana que en la misma se mencionan— por tratarse de error cuya rectificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 216 y 212 "a sensu contrario", ambos de la Ley Hipotecaria, cambiaría el sentido general de la inscripción o de alguno de sus conceptos, afectando, como afecta, a extremo tan esencial como es la atribución de las fincas en diversa proporción a sus titulares y no consentir, por lo demás, don Juan, don Manuel, doña Rosario y doña Susana del Castillo y del Catillo en la rectificación, únicos interesados —además de los solicitantes— en las inscripciones como causahabientes de la titular registral doña María de la Candelaria del Castillo y del Catillo, según consta en acta suscrita hoy a mi presencia, que se archiva, debiéndose, en fin, decidirse la cuestión suscitada en juicio ordinario conforme a los artículos 218 de la Ley Hipotecaria y 329 de su Reglamento. El defecto es insubsanable. Esta nota se extiende con la conformidad de mi cotitular, Telde, 14 de febrero de 1981.»

Resultando que por don Pedro Hernández del Castillo se interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, alegando: Que estamos en presencia de un error padecido en los asientos del Registro, y no de un error en el título-documento en virtud de los cuales se practicaron aquéllos; que la Ley y el Reglamento Hipotecario sólo contemplan dos clases de errores en los asientos, materiales y de concepto, y que la diferencia entre una y otra clase de error, de acuerdo con los artículos 212 y 216 de la Ley Hipotecaria, se concreta en la circunstancia, afirmativa o negativa, de cambiar, alterar o variar el verdadero sentido general del asiento o de sus conceptos; que la diferencia, pues, entre ambas clases de errores no radica en la mayor importancia o trascendencia del propio error y de las consecuencias que su corrección lleve consigo; que, de igual modo, el error será material cualesquiera que sean las características e importancia de los mismos, como sería, por ejemplo, su entidad numérica en los supuestos de cambio de cantidad; que el caso que se plantea en el presente recurso tiene las mismas características, ya que constando en el título particional que determinadas fincas se adjudican a tres herederos en distinta proporción, no obstante en los asientos del Registro se hace constar que lo es por terceras e iguales partes entre ellos, habiéndose verificado con ello un cambio de cantidad de los previstos en el artículo 212 de la Ley Hipotecaria; que también se recurre contra la nota calificatoria en razón a que el Registrador debió limitarse —si entendió que el error era de concepto— a extender la nota oportuna, y sin embargo no se procede de este modo, sino que, partiendo de la base de que el error era indiscutiblemente de concepto, se emplaza a los causahabientes del titular registral y al no consentir aquéllos en lo solicitado se levanta acta, y se advierte en dicha nota que la cuestión habrá de decidirse en juicio ordinario; que a este respecto debe señalarse que si bien el error en sí no constituye una calificación registral, sí se puede interponer recurso gubernativo contra la calificación registral que se opone a la subsanación pretendida; que junto con la instancia calificada se acompañaron el título que dio lugar a la práctica de las inscripciones en que dicho error se padeció, y copia del acta notarial de fecha 25 de junio de 1979, autorizada por el Notario de Las Palmas, don José Manuel Die Lamana, tramitada de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento Notarial y cuya finalidad específica radicaba en constatar la existencia del error, su evidencia y la procedencia de su rectificación; que según se desprende de dicha acta, en su tramitación se dio el oportuno traslado a los hermanos Del Castillo y del Catillo, don Juan, don Manuel, doña Rosario y doña Susana, quienes comparecieron y no manifestaron oposición al objeto del acta en lo referente al error discutido; que el Notario autorizante del acta concluye declarando —de conformidad con el apartado cuarto, párrafo segundo del artículo 209 del Reglamento Notarial— que el error existente en los libros de Registro de la Propiedad de Telde constituye un error material susceptible de subsanación sin procedimiento litigioso, por lo que procede declarar justificada la notoriedad de los hechos y situaciones jurídicas alegadas; que, en consecuencia, y dado el